

LA MESA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CIUDAD JUÁREZ

Entrevista de *Clivajes* a Hugo Almada Mireles

Una de las más importantes experiencias de corresponsabilidad gubernamental y civil en el campo de la prevención social de la violencia y el delito, la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, contribuyó a la disminución de cierto tipo de delitos y, sobre todo, a la rendición de cuentas de aquellas instituciones gubernamentales que, entre 2008 y 2011, intervinieron en la ciudad.

En esta entrevista, el investigador Hugo Almada, miembro de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica y coordinador de la Maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hace una evaluación realista de los logros y retos de la mencionada Mesa, y analiza las dificultades estructurales para la aceptación del diálogo entre instituciones y organizaciones tradicionalmente antagónicas. La Mesa de Seguridad y Justicia puede observarse, entonces, en una dimensión más precisa, sin la retórica que la presenta como un paradigma.

De esta experiencia de prevención es posible extraer numerosas lecciones para quienes intervienen en el campo de la violencia y el delito, desde la perspectiva de la democratización local. Es, ni más ni menos, un caso de particular interés para el debate público y el análisis comparado de las políticas locales de seguridad.

En retrospectiva, ¿cómo caracterizas la inseguridad en Ciudad Juárez con respecto a los años del periodo 2008-2011, cuando la tasa de homicidios se disparó y el campo delictivo local era tan complicado que Juárez llegó a ser caracterizada como la Ciudad más peligrosa del mundo?

Creo que hay una mejoría significativa que puede expresarse en algunos indicadores; por ejemplo, en materia de homicidios, entre 1994 y 2006, tuvimos un promedio de 20 homicidios por cada 100 000 habitantes, que se disparó en los años mencionados hasta alcanzar los 300 en junio y julio, y en noviembre de 2010. El año 2010 terminó con alrededor de 240, y durante tres años: 2008, 2009 y 2010 fuimos caracterizados como *La ciudad más violenta del mundo*. Con base en este indicador de homicidios por cada 100 000 habitantes, para 2011 quedamos en un honroso segundo lugar, detrás de

San Pedro Sula. En 2014, hemos tenido, en promedio, 40 homicidios por mes, es decir, si estamos hablando de una situación que cambió en este sentido de una manera muy significativa, y yo diría que para bien, andaríamos, en este 2014, en alrededor de 30 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Junto a esto, hay avances muy significativos en otros indicadores; por ejemplo, el secuestro casi se ha eliminado. Por lo menos el secuestro como actividad económica, para obtener el ingreso, se ha eliminado... Es un hecho que el secuestro ha dejado de ser un problema significativo en la ciudad. La extorsión es mucho más difícil de medir, pero la percepción que tenemos es que ha bajado de manera considerable. El *carjacking* es el mes más bajo en tres años, es decir, los indicadores relacionados con delitos de alto impacto, como consecuencia de la acción de la delincuencia organizada, es un hecho que están a la baja de manera muy significativa. Con todo, seguimos teniendo un nivel de violencia preocupante, porque estos 40 homicidios siguen siendo muchos, por lo menos para esto, y también lo real es que el nivel de descomposición social es bastante grave. Se ha logrado una contención del conflicto, pero los fenómenos asociados a la descomposición social siguen estando presentes, y esto implica un riesgo evidentemente de que la situación no mejore. Yo creo que va ser difícil bajar de esos 40 homicidios por mes, 30 por cada 100 000 habitantes que tenemos ahora.

En tu opinión, ¿qué factores han contribuido a la mejora significativa de la seguridad de la ciudad?

Hubo varios factores. La estrategia del gobierno federal, lo que eufemísticamente se llama *el control territorial*, fracasó en la ciudad. Yo creo que hay un quiebre que permite empezar a mejorar, hacia mediados de 2011. Y este cambio tiene que ver con varios factores; por un lado, la salida de las fuerzas federales. El que se hayan ido los federales de alguna manera fue un alivio. Al salir éstos, baja el tamaño de los contendientes de manera significativa. Otro elemento significativo es que, junto con esta salida de la tropa, hay, por una parte, en este momento, un esfuerzo significativo para fortalecer la policía de investigación, es decir, estamos hablando de que en Juárez, durante toda la etapa crítica, no había prácticamente ministerio público federal; había siete agentes de los cuales solamente dos estaban comisionados a homicidios y, de estos, dos no hacían nada; eran tantos los expedientes, que no se atraía los casos.

A mediados de 2011, llegaron 40 nuevos agentes del ministerio público federal, con sus equipos, y la delegación de la PGR se convirtió en una delegación fuerte, activa.

Además de esto, llegó un grupo antisequestros, también significativo, de la policía federal. La policía estatal destinó un grupo antiextorsión bastante fuerte. Un elemento más es que empezaron a actuar de manera coordinada la policía federal y la estatal, pese a ser de diferentes partidos políticos, es decir, empezó a haber una coordinación real que antes no había, y menos en toda la última etapa del periodo anterior.

Un elemento previo a esto es que, a nivel del Estado, se agruparon las diferentes policías estatales y la procuración de justicia en una sola instancia: la Fiscalía General del Estado, que paulatinamente empezó a tener algún control de las policías estatales. Esta acción, la coordinación con la policía federal, el hecho de que hubiera un contingente de policía de investigación mucho más activo, más significativo, y el hecho de que además de esto se empezara a trabajar con voluntad, o sea, que empezara a haber investigación, que empezara a haber procuración de justicia efectiva, yo diría que de manera puntual en relación con los delitos más graves, como fueron el secuestro y la extorsión, han sido muy importantes para que se registrara una baja en la delincuencia. Es decir, se empezó a actuar efectivamente; la procuración de justicia empezó a actuar. Se empezó a detener bandas muy significativas de extorsionadores y secuestradores, y lo que es más relevante, empezaron a ser condenados efectivamente.

A mi modo de ver, en algunos casos la cadena perpetua no influye ni a favor ni en contra de, pero sí condenas significativas y acotando los márgenes de impunidad, que transforman la percepción de la acción de la justicia. Se maneja que hubo un tipo de arreglo entre los grupos; es posible que lo haya habido. No son elementos que nosotros podamos tener. Es posible que lo haya habido en cuanto a la distribución de las zonas de venta de drogas, pero nuestra percepción, en caso de delitos graves, es que no hubo tolerancia en absoluto y que esto cambió también el mensaje de la autoridad. Esto y la salida de la tropa fueron elementos muy importantes para el mejoramiento de la situación.

Otro elemento también relevante, sin duda, es que se logró un control de la policía municipal. Hay que entender que la policía municipal estaba totalmente corrompida y esta corrupción era gran parte del problema. Estimo, entonces, que la acción de las policías federal y estatal, más o menos coordinadas, implicó por lo menos algún arreglo de no participación de la policía municipal en determinados hechos más graves, y este control, en cosas como que dejaran de participar como halcones o dejaran de participar en situaciones de gravedad, es otro de los elementos que sin duda influyó.

En este sentido, hay elementos muy importantes. A la policía municipal desafortunadamente se le permitió cometer toda una serie de abusos durante todo el

periodo pasado. Al mismo tiempo que se enfrentaron con mucha mayor voluntad delitos como la extorsión y el secuestro, se le permitió a la policía municipal toda una política, gravísima, de vejación a los sectores populares. Tan solo en un semestre de 2012, la policía municipal detuvo y multó a más de 100 000 personas, de las cuales únicamente alrededor del 3% fueron presentadas al ministerio público, y evidentemente en situaciones donde no se podía tipificar, es decir, estamos hablando de una de las políticas de detención ilegal, más abierta y más grande, que se ha dado en la historia, particularmente en perjuicio de los jóvenes pobres; significó también una política recaudatoria muy grande para el municipio y, bueno, el número de 100 000 es el de las multas cobradas efectivamente. Además de esto, muchísimas personas fueron privadas de su dinero cuando las detuvieron en algunos de los retenes de la policía municipal durante este periodo. Vamos a decir, entonces, que en estos años hubo una definición de estrategia muy clara y, al mismo tiempo, una licencia a la policía municipal para este tipo de actuaciones, con el argumento de que ayudaban a la seguridad y que la policía tenía que ir para adelante..., una serie de cosas, pero que en realidad también fue una política de abuso hacia los sectores populares. Observo que esta política ha disminuido de manera muy considerable en este periodo, es decir, se siguen manteniendo indicadores aceptables; creo yo que no están mejorando ahorita, sino que están estables. Siguen existiendo algunos abusos de parte de la policía, que son graves y que necesitamos atender sin duda, pero no la situación de detención ilegal, arbitraria, institucionalizada, del periodo pasado.

Ahora tendríamos básicamente dos situaciones graves por atender; una, como decía, el nivel de descomposición social de la ciudad. No hay que olvidar que, durante más de cuarenta años, Juárez vivió un proyecto maquilador que implicó crecimiento económico y empleo, pero durante los cuales no hubo prácticamente política social: no hubo atención a los niños, a los jóvenes, a las mujeres trabajadoras, lo que generó una situación de rezago y de déficit social y psicoafectivo, importantes para la población. Esta situación se vio agravada después de cuatro o cinco años de sobreexposición a la violencia en los niveles en los que la padecemos, es decir, ahorita tenemos una sociedad que enfrenta problemáticas sociales y psicoafectivas más drásticas y más graves que hace seis años, y esto es un factor que, de no atenderse adecuadamente en políticas de prevención adecuadas, generará violencia y problemas emocionales. La otra preocupación grave, sin duda, es que vuelva a generarse la guerra contra el crimen organizado —entendiendo que ésta no es una guerra solamente entre cárteles, sino también entre fracciones del Estado— y que vuelva a generarse, sobre todo ahora, en

la coyuntura electoral; que esto pueda implicar un cambio de grupo o de partido en el poder, que signifique una vuelta atrás en lo que se ha ganado en materia de seguridad, es decir, que se empiece a liberar con cualquier pretexto a delincuentes peligrosos o a tolerar delitos, tales como el asesinato, el secuestro y la extorsión, en aras de una disputa por la plaza, que evidentemente debe de estar a salvo de cualquier política. Los diferentes actores deben entender que los ciudadanos no podemos ser rehenes de esa disputa y que lo que se ha logrado en materia de seguridad necesita ser consolidado por cualquier autoridad.

En relación con estos logros, ¿qué piensas de la estrategia del pasado gobierno federal panista, de presentar “Todos somos Juárez” como un ejemplo de prevención Integral?

En mi opinión, tiene poco sustento. Podría hablar de una experiencia exitosa —sin duda, una experiencia polémica, pero a mi juicio exitosa— de la Mesa de Seguridad, y pudiera hablar de algunos logros puntuales y relativamente aislados en algunas de las mesas restantes, pero de ninguna manera de que “Todos somos Juárez” haya sido una intervención social articulada o que haya tenido algún impacto como tal en la realidad social. En síntesis, como lo decía, sin dejar de reconocer lo polémica que pudo haber sido su actuación, la Mesa de Seguridad es un ejemplo de experiencia ciudadana exitosa. En el consejo de educación, hubo algunos logros importantes, en materia de salud, fue muy poco lo que se logró, pero hubo algunas cuestiones. La Mesa de Desarrollo Social fue un fracaso; en lo económico y lo laboral conozco menos. Tengo la impresión de que en lo laboral hubo algunos logros, pero en el rubro de economía no en su momento.

“Todos somos Juárez” no fue solo una intervención, sino varias intervenciones. Siendo optimistas, pensaríamos que hubo intervenciones. Estaríamos hablando de, por lo menos, seis o siete intervenciones distintas, con lógicas distintas, con muy poca coordinación entre sí, que lograron algunas cuestiones significativas, pero, vamos a decir, no hubo un esquema de planeación articulado, central de la intervención; no hubo una priorización de objetivos inmediatos a corto y mediano plazo; no hubo una definición de las poblaciones más vulnerables, que necesitaban ser atendidas, o de los sectores en situación más crítica, que necesitaban ser atendidos; mucho menos hubo una definición de programas sociales emergentes para la atención a estas poblaciones, como se hubiera requerido de una intervención así. Lo que tuvimos fueron recursos que se “bajaron” de los programas ordinarios de las secretarías y que sirvieron

ciertamente en muchos casos, pero que, con eficiencia, no pueden considerarse... El éxito en la baja del nivel de violencia y de delincuencia tiene que ver con las acciones en materia de seguridad, en particular de las autoridades; aunque no se haya difundido, hubo un cambio real de estrategia. Hay un aporte de los ciudadanos en este sentido, pero no veo que la intervención en materia social haya sido, salvo algunas cosas puntuales, un factor muy importante en la disminución de...

El desempeño institucional, los policías...

No, definitivamente el cambio en la estrategia... Yo creo que los ciudadanos de ninguna manera somos responsables de ese éxito, pero nuestra participación sin duda aportó. Se podría haber hecho mucho más con mucho menos dinero, si esos recursos hubieran sido efectivamente centralizados y efectivamente dirigidos hacia las poblaciones en situación más crítica; poblaciones con mayores situaciones de riesgo y específicamente a programas que, siendo programas sociales, públicos, tuvieran un impacto a corto plazo en materia de reducción de la violencia. Por ejemplo, si pudiéramos definir ahorita en qué se van a gastar no los 3 000 millones de “Todos somos Juárez” que se gastaron en un año, sino unos 3 o 500, deberíamos pensar en un programa integral de atención a víctimas de la violencia; deberíamos pensar en programas de atención a los adolescentes en situación crítica, tanto a los que están dentro de la escuela, en edades realmente en riesgo, como a los que están fuera de la escuela; programas que tienen que ver con reinserción escolar y con oportunidades laborales y comunitarias; tendríamos que pensar en programas comunitarios de atención a las adicciones; tendríamos que pensar en programas especiales de mediación para la paz, de resolución de conflictos de mediación alternativa; posiblemente, también en un programa serio de derechos humanos, es decir, tendríamos que pensar en aquellos programas que, dentro de la política social, impactan más directamente y a corto plazo la política de seguridad. Suele haber dos grandes eufemismos en estos dos grandes extremos, polaridades; una es que la política social no tiene nada que ver con la política de seguridad y que todo tiene que resolverse con policías y presión; otra es que, para combatir la delincuencia, hay que acabar con la pobreza y la desigualdad en términos sociales, como suele proponer la izquierda tradicional. En mi opinión, ninguno de estos extremos es cierto. La realidad es que el ámbito de impacto de la política social, sobre todo en materia de seguridad a corto plazo, puede estar

determinado por la claridad y decisión con que se definan poblaciones en situación de riesgo, poblaciones objetivo e intervenciones de emergencia a corto plazo.

Yo creo que se gastó mucho en cosas que, en algunos casos, son muy buenas; por ejemplo, que se haya arreglado el hospital infantil, claro, es una obra muy buena: finalmente quedó muy equipado; es muy bueno que el hospital de salud mental se esté inaugurando en esta semana: después de cinco años quedó terminado, y es otra cosa en la que se gastó. Creo que hay programas muy buenos; por ejemplo, el programa de becas de la Secretaría de Educación, que permitió a los adolescentes en situaciones muy críticas, de extrema pobreza, mantenerse en la escuela en momentos de crisis; creo que fue muy bueno el aumento que se obtuvo del programa Oportunidades. No debemos olvidar que vivimos una crisis económica gravísima, al mismo tiempo que la crisis de violencia. En este sentido, el incremento de Oportunidades ayudó realmente a salvar una situación de hambruna complicada en la ciudad, donde por primera vez se presentó este programa de becas. Fue un programa muy bueno. Algunos programas que desarrollaron organizaciones sociales para retener-recuperar a niños, adolescentes de sectores de primaria, que no se prescribieron a la secundaria. Vamos a decir que fueron buenas intervenciones aisladas en un conjunto que, como tal, no tuvo una estrategia definida en el sentido planteado. Yo creo que para otras experiencias, por ejemplo de intervenciones sociales emergentes, estas intervenciones deben ser realizadas y coordinadas por gente que sepa del tema: venía gente con buena voluntad, pero los funcionarios del gobierno anterior no necesariamente sabían de intervención social.

Ahora, si la Mesa de Seguridad y Justicia fue lo más logrado del conjunto de las mesas de trabajo y de la estrategia misma, ¿de qué manera contribuyó, específicamente, a la mejora relativa de la seguridad y cuáles piensas que son en estos momentos los retos que enfrenta esta instancia de coordinación?

Para valorar la Mesa de Seguridad como experiencia ciudadana, hay que entenderla primero como un espacio plural. Es una cuestión muy relevante, un perfil, digamos, mayoritariamente empresarial en el que participamos activistas sociales con bastante experiencia y con otro tipo de conexiones, inquietudes. Hay que entenderla en el contexto de la crisis de 2010; imposible entenderla, además, sin un cierto apoyo de las autoridades federales, ante la gravedad de violencia que vive la ciudad, y de las autoridades estatales. ¿Qué aportó la Mesa de Seguridad? Primero, como experiencia plural, va a haber diferentes visiones. Un aporte inicial importante es que representó

un espacio serio en el que pudieron actuar las autoridades federales y estatales —es increíble pero no se conocieran entre sí—, cuando en la Mesa organizamos los diferentes comités sobre cada uno de los delitos: procuración de justicia, robo de autos, comités de extorsión. Las autoridades federales y estatales que tenían que ver con eso no se conocían; la Mesa fue entonces como un lugar de encuentro de autoridades y, mal que bien se empezó a dialogar con seriedad, porque los ciudadanos apostamos a eso, y apostamos a dar seguimiento a los que se iban.

Yo creo que el hecho de que la Mesa haya sido desde el principio y siga siendo coordinada por ciudadanos la constituye en una experiencia distinta. En las reuniones de la Mesa, se presenta primero el seguimiento de los indicadores que realizamos los ciudadanos, lo que de entrada le da una objetividad al punto: no vamos a oír discursos grandilocuentes de una situación, sino “señores está pasando esto”, y cuando hay alguna diferencia en los indicadores esto se discute, pero se parte de una base concreta y después siguen los informes de cada uno de los comités, presentados por un ciudadano en cada caso. Los que hablan normalmente ahí son los ciudadanos coordinadores de cada uno de los comités.

¿Cuántos comités son?

Seis o siete comités de indicadores: el de procuración de justicia, el de extorsión, el de secuestro; por supuesto, el de prevención... Entonces se presenta el informe de cada uno de los comités —secuestro hace mucho que no presenta informe; robo de autos es un comité que ha trabajado bien, ahora se amplió a robo de comercio y casa-habitación—. Los informes de cada comité son presentados por un ciudadano y esto proporciona un espacio de seriedad; a la discusión se le da un espacio, se da seguimiento a los acuerdos... O sea, en la reunión hay la presentación de cada comité por un ciudadano, la discusión, hablan entre todos: “se avanzó en esto, no se cumplió esto o se ha cumplido esto”, y los informes de las autoridades van en la parte final de la reunión, es decir, hay informes de las autoridades, pero van en la parte final de la reunión.

Este esquema permite o ha permitido cosas que, hasta la fecha, son muy difíciles de lograr. En mi experiencia en otros contextos, son cosas como que las policías rindan cuentas. Normalmente, las policías han sido de instituciones opacas, oscuras, donde es imposible una cuestión así. Aquí el consenso —en el que es difícil salir con “payasadas”,

por decirlo de alguna manera, o con imposiciones, atajadas por un colectivo— implica un seguimiento de acuerdos y acciones y decisiones puntuales; implica luego la ejecución y la revisión, es decir, ha sido un sistema de rendición de cuentas real, por parte de las instituciones. Se ha avanzado. En un principio, esto era más difícil, más complicado, había más resistencia; posteriormente, se ha ido avanzando en una situación que, a mi modo de ver, es una experiencia importante y significativa. Me ha tocado escuchar testimonios de algunas autoridades policiales, quienes dicen que “ya no tenemos miedo de presentar el informe al Jefe; donde tenemos miedo es en la Mesa, a la hora de enfrentar la vigilancia y el informe a los ciudadanos”.

Otra de las cosas importantes que se lograron fue que, a pesar de que la Mesa era muy plural y había posiciones muy distintas al interior —vemos defensores de derechos humanos de toda la vida, hasta posiciones abiertamente represivas, por ejemplo—, a pesar de que nunca hubo un consenso del todo claro —por ejemplo en relación con la salida del ejército federal, había quienes opinábamos que debían salir y había quienes nunca fueron claros—, logramos un consenso muy importante en el sentido de que necesitábamos más policía de investigación, de que si no había policía de investigación, no habría solución en esta ciudad. No hay que olvidar que en el periodo de mayor violencia, la delincuencia organizada nunca lanzó una ofensiva abierta contra el Ejército, contra la Policía Federal o contra alguna corporación policiaca; en cambio, sí mató sistemáticamente a policías de investigación: alrededor de 70 —no recuerdo bien las cantidades exactas, pero hubo varios casos, incluso emblemáticos, paradigmáticos, muy significativos, que se pueden verificar, simplemente revisando la información.

Entonces..., cuando Calderón vino en Febrero de 2010, fue en su segunda visita cuando más nos escuchó. Nosotros presentamos un discurso en el que básicamente planteamos que esa estrategia llamada de “control territorial” había fracasado; que en Juárez había fracasado; que lo que se necesitaba era policía de investigación y que, en todo caso, los militares cuidaran a la policía de investigación, porque cualquier otra opción nos llevaría a la guerra. Sin policía de investigación, el único recurso que tenía el Estado era detener, torturar y matar. No había Estado de Derecho por ninguna parte. En síntesis, lo que le planteamos al Presidente se resume en una frase que decía: “no queremos siete mil militares, queremos doscientos agentes del ministerio público federal”. Presentamos esto ante el consenso de toda la Mesa de Seguridad y ante todos los sectores vivos de la ciudad, en el Hotel Camino Real. El foro reunió a unas 700 personas, a la televisión y todo lo demás.

El Presidente escuchó —fue una de las pocas veces que hizo más contacto, que escuchó mucho mejor—, nos respondió en una situación difícil. Nosotros planteamos, con toda claridad, que la estrategia ya había fracasado, que necesitábamos lo que estoy refiriendo. El Presidente escuchó y contestó: “Miren, tomo nota de lo que me dicen, no tengo los doscientos agentes del ministerio público que me están pidiendo, pero me comprometo a hacer todo lo posible para enviarles todos los que podamos, y yo me comprometo, doy mi palabra de que Ciudad Juárez va a volver a ser Ciudad de Leyes”. Esas fueron, textualmente, las palabras de Calderón. Bueno, pues esto que prometió no se cumplió pronto. Tardamos todavía más de un año en gestiones por la Mesa de Seguridad y varias entrevistas con Chávez Chávez, para que finalmente llegaran los cuarenta agentes del ministerio público en este cambio de política: que efectivamente llegaran policías de investigación y empezaran a trabajar. Cuando llegaron los agentes del ministerio público, más el grupo antisequestros, coordinados con la policía estatal, empezó a haber un ministerio público estatal en las actividades federales para empalmar la cuestión legal y que después no hubiese problemas. A la hora que empezó a trabajar, esto sí hizo diferencia. Vamos a decir que, finalmente, lo que se necesitaba era el mensaje claro del Estado, en el sentido de que no se valdría matar, secuestrar ni extorsionar, independientemente de cómo se dieran los conflictos.

¿Qué retos prevés; identificas riesgos de desintegración de la Mesa?

Sí. Antes deja mencionarte otro logro importante: la Mesa contribuyó a generar confianza y a posibilitar la denuncia ciudadana. De las cuestiones más graves, cuando se presenta una crisis de violencia, es que los sistemas de denuncia, sobre todo los lugares de recepción de denuncias, estén infiltrados o en manos de la delincuencia organizada; esto pasaba en Juárez. Hubo varios casos en que la denuncia se revirtió totalmente, y de manera gravísima, contra el denunciante; llamadas en las que: “¡Ah!, ¿nos estás denunciando, cabrón?” “¡Así te va a ir, güey!”, lo que realmente implica el quiebre del aparato de justicia del Estado, es decir, si el lugar de la denuncia está totalmente contaminado, el sistema de justicia se rompe; se rompe completamente y la población queda inerme.

Nosotros trabajamos de varias maneras; y un primer elemento fue traer un *call center* para que, efectivamente, hubiera un número de denuncia que llegara por otras vías, de manera confiable, a autoridades que, por lo menos, tenían la intención de resolver y estaban en este tipo de situación. Yo creo que ese fue otro elemento importante, que

funcionó parcialmente en muchos casos. Incluso la Mesa sirvió para construir un canal de confianza con algunas autoridades en situaciones graves —una acción delicada y significativa— y yo creo que es otro aporte importante. Otro elemento también relevante, como quiera que sea, fue el Centro de Confianza Ciudadana. Y gracias a las gestiones realizadas, se logró poner una oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CHDH), uno de los visitadores de la CHDH, dentro de la Fiscalía General del Estado, como instancia oficial. Esta instancia jugaba el papel de recibir quejas de abusos, por parte de los ciudadanos; en algunos casos, eran quejas de abusos o por amenazas de policías y, en otros, eran incluso situaciones desesperadas de alguna persona desaparecida o alguna cuestión así.

El Centro de Confianza se da en lo particular, pero en la Mesa, en un sentido más amplio, jugó un papel de apoyo a este tipo de denuncia de ciudadanos y de presentación de quejas. No las quejas institucionales que procesa la CHDH: estas quejas tienen que seguir todo el proceso y son más tardadas, sino de solicitudes de acción rápida. Por decirlo de alguna manera, las autoridades federales o estatales lograron concluir algunos casos, evitando daños significativos a la población o impidiendo abusos por parte de “malos policías”. Entonces, yo creo que este Centro de Confianza fue también un elemento importante. Hay otros logros. Por ejemplo, el comité de robos de autos ha venido haciendo otros trabajos significativos con el plaqueo, es decir, grabar los números de serie en todas las ventanas y los espejos de todos los automóviles para detectar los autos robados. La Mesa ha participado en una campaña fuerte en contra de los automóviles sin placas; se han hecho operativos en los *yonkes*, para detectar los núcleos de vehículos robados. Bueno, es otro comité.

No podría decir que el éxito corresponde a los ciudadanos de ninguna manera; creo que a veces se exagera; es fácil, como el propio discurso de autocomplacencia. A veces hay tensión, cuando se trata de abusos. Ha habido tensión, por supuesto, al interior de la Mesa, entre gentes que son mucho más abiertas, complacientes y colaboradoras del gobierno y gente que pensamos que en algunos momentos es necesario también un posicionamiento crítico-público; con el costo político que pueda tener, pero que ayude. Ha habido tensión, pero, bueno, yo creo que hasta ahora ha logrado mantenerse. La Mesa está en una situación de riesgo, porque hay una división interna que se ha hecho más marcada en los últimos meses, a consecuencia de este tipo de situaciones.

¿Qué desacuerdos se han producido?

El desacuerdo más importante tiene que ver con la operación de este tipo de Centro de Confianza Ciudadana y la acción de la autoridad municipal anterior, a diferencia de la actividad de las instancias federal y estatal que, como proceden de diferentes partidos, tuvieron un nivel de colaboración muy importante y significativo con la Mesa... Siempre tuvimos muchos problemas con el gobierno municipal anterior, porque hubo una resistencia muy grande a participar en la Mesa. Nombró un enlace de parte de la Mesa; un enlace, pues..., más a fin a él —en lugar de lo que venía siendo el trabajo del congreso ciudadano—, y generó una división al interior de la Mesa, porque ya el Centro de Confianza no podía recibir casos del centro del municipio, sino que ahora los casos del municipio tenían que ser canalizados a través de este enlace. La verdad es que no sé si por ineficiencia del enlace u otra razón, pero la verdad es que no se resolvió nada por ese camino. Todo esto generó tensión entre las dos instancias, vamos a decir, de operación; una división aderezada con temperamentos fuertes y un conflicto personal. Y creo que este es el asunto que está en la raíz de la posible división. Ahora, yo confié en que lograremos sortearla y seguir adelante, pero sí es un momento de incertidumbre que, por otro lado, enfrentan todas las organizaciones civiles. En este momento, tenemos cuatro años y medio trabajando, de manera significativa, un grupo de ciudadanos muy plural, en condiciones difíciles. Yo creo que no hay que asustarse.

Dijiste al principio de esta entrevista que la prevención de la violencia y el delito no solo aqueja dispersión sino un bajo impacto, comparado con los logros de la coordinación interinstitucional en el control directo de los delitos de alto impacto. ¿Cuál crees que sea el futuro de la prevención social en Ciudad Juárez, a propósito de la asignación reciente de fondos federales para el desarrollo de proyectos de intervención social?

Es un futuro incierto. Varias gentes tenemos rato queriendo trabajar en eso, pero no ha habido forma clara de incidir. Básicamente, yo creo que si “Todos somos Juárez”, podríamos decir si hubo una inversión educativa —aunque no centralizada ni planificada— con alguno de los programas que pudieron tener impacto. La intervención ahora, con el nuevo esquema del PRONAPRED —Programa Nacional para la Prevención del Delito—, tiene muchos menos recursos y sigue estando sin centralizar, sin planificar y sin priorizar nada de la prevención, es decir, tenemos

autoridades que no entienden de prevención y no se ha hecho un buen planteamiento de intervención en materia de social.

Acabamos de tener un escándalo sobre cómo el municipio había otorgado los recursos y a qué organizaciones para estos proyectos, pero la realidad es que la forma como la universidad lo hizo no mejora significativamente ese reparto. A mí me genera, por lo menos, serias dudas, y ciertamente no es un reparto en el que aparezca, con claridad, la orientación de las intervenciones sociales en materia de prevención de la violencia y en materia de las intervenciones que mencionaba hace rato. En síntesis, yo creo que, en materia de prevención, tenemos menos recursos e igual desorganización. Y creo que, en esto, nuestras autoridades estatales, municipales y también federales nos siguen debiendo una intervención digna de ese nombre, por lo menos en cierta unidad planificada, articulada, que mínimamente pueda definir objetivos de poblaciones en situación proletaria, en situaciones de vulnerabilidad; intervenciones... Intervenciones que se prioricen en cada área. Creo que hay algunos programas buenos que pueden tener impacto, pero seguimos sin esa estrategia para Ciudad Juárez.